

Señor, Juez Civil del Circuito de Cali (Reparto)
E. S. D.

REFERENCIA: Demanda de Responsabilidad Civil Extracontractual, Medidas Cautelares y solicitud de amparo de pobreza.

PROCESO: Verbal.

DEMANDANTES: Carlos Enrique Gutierrez (Lesionado), Carlos Eduardo Gutiérrez Murillo (Hijo), John Edwin Gutiérrez Murillo (Hijo), Luis Fernando Gutiérrez Murillo (Hijo), María Yolanda Murillo (Cónyuge)

DEMANDADOS: Milton Alberto Mosquera Padilla (Conductor), Nelly Hurtado Viveros (Propietaria), HDI Seguros S.A (Aseguradora)

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.836.087 de Cali (Valle), abogado titulado y en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 237908 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado judicial de las partes demandantes, me permito presentar demanda de Responsabilidad Civil Extracontractual, que consta de la siguiente:

ABREVIATURAS EN TEXTO.

Me permito indicar las abreviaturas de las siguientes oraciones, frases o palabras, para mejor la comprensión de la demanda:

- HDI Seguros S.A, en adelante, “la aseguradora”.
- Carlos Enrique Gutierrez, en adelante, “La Víctima”.
- El 26 de enero de 2022, en adelante, “la fecha del accidente”.

CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

PARTES DEMANDANTES:

Carlos Enrique Gutiérrez (Lesionado): Identificado con cédula de ciudadanía No. 14.999.965, actuando en nombre propio. Domiciliado en la ciudad de Cali. Dirección de notificación carrera 28 E # 54-105 Cali (Valle) Correo electrónico: fotoscaliche@gmail.com

Carlos Eduardo Gutiérrez Murillo (Hijo) Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.127.316, actuando en nombre propio. Domiciliado en la ciudad de Cali. Dirección de notificación carrera 28 E # 54-105 Cali (Valle) en la ciudad de Cali. Correo electrónico: krlhos-11@hotmail.com

John Edwin Gutiérrez Murillo (Hijo) Identificado con cédula de ciudadanía No. 16.933.118 actuando en nombre propio. Domiciliado en la ciudad de Cali. Dirección de notificación carrera 28 E # 54-105 Cali (Valle) en la ciudad de Cali. Correo electrónico: gjhonedwin@gmail.com

Luis Fernando Gutiérrez Murillo (Hijo) Identificado con cédula de ciudadanía No. 94.532.304 actuando en nombre propio. Domiciliado en la ciudad de Cali. Dirección de notificación carrera 28 E # 54-105 Cali (Valle). Correo electrónico: lfgutierrez0825_@hotmail.com

María Yolanda Murillo (Cónyuge) Identificada con cédula de ciudadanía No. 94.532.304 actuando en nombre propio. Domiciliado en la ciudad de Cali. Dirección de notificación carrera 28 E # 54-105 Cali (Valle) en la ciudad de Cali. Correo electrónico: yam8555@gmail.com

PARTES DEMANDADAS:

Milton Alberto Mosquera Padilla (Conductor): Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.592.278, actuando en nombre propio, domiciliado en la ciudad de Cali, dirección de notificación calle 83ª # 28E # - 3 en la ciudad de Cali.

HDI Seguros S.A (Aseguradora): Identificada con NIT No. 860004875-6, representada legalmente por Juan Rodrigo Ospina Londoño por quien haga sus veces; dirección de domicilio en la ciudad de Bogotá Cra. 7 #72 - 13, dirección de notificaciones judiciales presidencia@hdi.com.co

Nelly Hurtado Viveros (Propietaria): Identificada con cédula de ciudadanía No. 25435680, bajo gravedad de juramento, los demandantes manifiestan que no tiene conocimiento de dirección física o electrónica de la demandada.

CAPÍTULO 2. HECHOS.

1. El día 26 de enero de 2022 ocurrió un accidente de tránsito entre el vehículo identificado con placa IHO345 conducido por Milton Alberto Mosquera, y la motocicleta de placas MWR73B en la que se transportaba la Carlos Enrique Gutierrez.
2. El día 26 de enero de 2022 Carlos Enrique Gutierrez tenía 70 años.
3. Carlos Enrique Gutierrez es padre de Carlos Eduardo Gutiérrez Murillo, John Edwin Gutiérrez Murillo, Luis Fernando Gutiérrez Murillo.
4. Carlos Enrique Gutierrez es conyuge de María Yolanda Murillo.
5. Las mencionadas personas hasta la fecha del accidente habían convivido en un ambiente familiar, de paz, armonía, ayuda mutua, hermandad y comprensión.
6. A la fecha del accidente, la víctima realizaba labores como fotógrafo devegando un salario mensual de 1.160.000.
7. El 26 de enero de 2022 aproximadamente a las 15:00 horas, Carlos Enrique Gutierrez se desplazaba en calidad de conductor de su motocicleta de placas MWR73B sobre la calle 73 con carrera 28B y 28D en sentido Norte-Sur en la ciudad de Cali.

8. El 26 de enero de 2022 aproximadamente a las 15:00 horas, Milton Alberto Mosquera, se desplazaba en calidad de conductor del vehículo de placa IHO345 sobre la calle 73 con carrera 28B y 28D en sentido Norte-Sur en la ciudad de Cali.
9. El 26 de enero de 2022 aproximadamente a las 15:00 horas, el señor Milton Alberto Mosquera, quien conducía el vehículo de placas IHO345 en exceso de velocidad impacta la parte trasera de la motocicleta de la víctima, como consecuencia del impacto, la motocicleta y el cuerpo de la víctima fueron arrojados debajo del vehículo que se encontraba delante.
10. Las causas eficientes y determinantes del daño que sufrió la víctima son aplicables a Milton Alberto Mosquera, conductor del vehículo de placas IHO345 y consisten en: 1). Exceso de velocidad 2). No mantener distancia de seguridad 3). Aumentar el riesgo permitido, 4) No mantener distancia de seguridad y 7). Conducir con imprudencia e impericia.
11. Al momento del accidente de tránsito, el vehículo de placa IHO345 era bien mueble de propiedad de Nelly Hurtado Viveros.
12. Al momento del accidente, los patrimonios del conductor y el propietario del vehículo de placa TVJ 855 tenían asegurado el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual con la compañía HDI SEGUROS S.A.
13. Como consecuencia del accidente de tránsito, la víctima quedó inconsciente y fue trasladada a la Unidad médico quirúrgica Santa Clara I.P.S S.A.S. de la ciudad de Cali, donde se les diagnosticó: *“trauma en torax y miembros inferiores”, “Trauma contuso de piernas, rodilla izquierda, reja costal derecha, clavícula derecha, tobillo izquierdo”, “herida gigante en tercio proximal cara anterior medial y posterior de la pierna izquierda”, “limitación funcional en ambas piernas y tobillo izquierdo”, “herida compleja, avulsiva en pierna izquierda, con bordes irregulares, desgarrados, con compromiso de tejido muscular, exposición ósea”*
14. La víctima fue intervenida quirúrgicamente. El mismo 26 de enero del 2022, se le realizó una cirugía en miembro inferior izquierdo para retirar tejidos inviables y se le realizó “ligamentorrafia de la lesión del ligamento”.
15. La víctima tuvo 6 meses de incapacidad, además, se vio obligado a realizarse constantes chequeos médicos debido al estado de su pierna. Siempre acompañado de su cónyuge e hijos quienes pasaron momentos de mucha angustia y sufrimiento al ver a su ser querido en estas condiciones.
16. El 13 de enero de 2023, mediante dictamen No. 16202300157, la Junta Regional de Calificación de Invalidéz del Valle del Cauca calificó a Carlos Enrique Gutierrez con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 18,60%.
17. Carlos Enrique Gutierrez pagó la suma de \$1.000.000 a la Junta Regional de Calificación de Invalidéz para realizar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral.
18. El 6 de enero de 2023 la víctima a través de su apoderado judicial, presentó solicitud ante la fiscalía 60 Local de Cali para solicitar copia de los documentos que contienen la investigación

penal en el proceso con radicado 760016099165202280277; no obstante, a la fecha no ha podido obtener dichos documentos.

19. La imprudencia e impericia del agente dañino ha frustrado el derecho de Carlos Enrique Gutierrez (Lesionado) Carlos Eduardo Gutiérrez Murillo (Hijo), John Edwin Gutiérrez Murillo (Hijo), Luis Fernando Gutiérrez Murillo (Hijo), María Yolanda Murillo (Cónyuge) De compartir plenamente y disfrutar de momentos placenteros del diario vivir como son: las actividades familiares, sociales, deportivas y cotidianas, que realizaban como familia.
20. La imprudencia e impericia de los agentes dañinos han causado en Carlos Enrique Gutierrez (lesionado), Carlos Eduardo Gutierrez Murillo (Hijo), John Edwin Gutierrez Murillo (Hijo), Luis Fernando Gutierrez Murillo (Hijo), Maria Yolanda Murillo (Cónyuge) mucho llanto, dolor, tristeza, congoja, y mucho sufrimiento.
21. La victima después del accidente de tránsito ha tenido que vivir épocas de angustia, depresión, tristeza y llanto; al ver que no ha podido volver a trabajar de la misma manera que lo hacia antes del accidente, no ha podido volver a realizar sus actividades diarias como jugar futbol, hacer deporte, bailar, correr entre otras; sus condiciones de vida estarán de por vida limitadas debido a sus limitaciones permanentes.
22. Carlos Enrique Gutierrez (lesionado) como consecuencia del accidente de tránsito, por las lesiones causadas, no ha vuelto a ser la misma persona. A partir de ese momento no comparte reuniones con sus familiares o con sus amigos. Su vida social se ha afectado totalmente.
23. La imprudencia e impericia de los agentes dañinos han causado en Carlos Enrique Gutierrez un deterioro evidente de su estado de salud fisica y mental, debido a las limitaciones con las que quedó su cuerpo no funciona de la misma forma como lo hacía antes del accidente de tránsito y está en constante estado de alerta, pues teme ser atropellado.
24. A la fecha de la presentacion de la demanda, los demandantes no han recibido indemnizacion alguna ni han sido reparados por parte de los demandados, por los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de transito.

CAPÍTULO 3.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1) Intereses moratorios del artículo 1080 del Código de Comercio.

La aseguradora tiene la obligación de pagar la suma probada al mes siguiente de la reclamación extrajudicial realizada por la víctima o al día siguiente de la notificación del auto admisorio de la demanda, de no hacerlo tendrá que pagar intereses conforme al artículo 1080 del Código de Comercio:

Con relación al pago de los intereses moratorios sobre la anterior cifra, hay que tener en cuenta que la cuantía del perjuicio solo se probó al interior del proceso y no antes, por lo que los intereses moratorios se calcularan desde 16 de diciembre de 2009, cuando se notificó la demandada (folio 102, Cuadeno I sin que haya lugar a imponerla sanción Prevista en el artículo 1080 del Código de Comercio Pues la reclamante no demostró la cuantía de la pérdida en el término establecido en esa disposición.

De conformidad con lo estipulado por el artículo 1080 del Código de Comercio “El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.

Por consiguiente, cuando el acreedor del seguro reclama su derecho extrajudicialmente, pero no logra demostrar la cuantía de la pérdida en ese momento, sino al interior del proceso judicial, no hay lugar a imponer el pago de los intereses de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, pues en ese caso hay que aplicar el inciso 2 del artículo 90 del código de procedimiento civil tal como lo ha indicado esta Corte: “desde luego, acreditada la obligación y su cuantía, (...) los efectos de la sentencia, en lo que atañe a la mora, retrotraen a la etapa de la litiscontestación, es decir al estadio procesal en que aquel asumió el riesgo de la litis, con todo lo que ello traduce”¹²

En el presente caso se debe condenar a intereses moratorios a partir de la reclamación judicial, porque se les probó el siniestro y la cuantía.

3.2) Responsabilidad Civil por el ejercicio de actividades peligrosas.

Para explicar el tipo de responsabilidad que gobierna el presente asunto, es importante citar una línea jurisprudencial de la Sala Civil de la Corte Suprema de justicia, donde ha establecido para estos eventos de conducción de vehículos, que el régimen aplicable es el de la responsabilidad objetiva:

“La Sala, por tanto, en su labor de unificación, respecto de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, reiterando en lo pertinente la jurisprudencia expuesta desde las sentencias de 14 de marzo de 1938 y de 31 de agosto de 1954, con las precisiones y complementaciones antedichas, puntualiza su doctrina y concluye, en síntesis:

- a) Es una responsabilidad cuyos elementos estructurales se reducen al ejercicio de una actividad peligrosa, el daño y la relación causal entre éste y aquélla.
- b) Es una responsabilidad objetiva en la que no opera presunción alguna de responsabilidad, de culpa, de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad, sino en el riesgo o grave peligro que el ejercicio de estas actividades comporta para los demás. La noción de

¹ CSJ SC 248 de diciembre de 2001, Exp 6230. reiterada en CSJ SC del 5 de abril de 2016, radicado. 2007-00072-01

² Corte Suprema de Justicia sala civil SC5681-2018. Magistrado ponente: Ariel Salazar Ramírez.

culpa está totalmente excluida de su estructura nocional, no es menester para su constitución, tampoco su ausencia probada la impide ni basta para exonerarse.

c) La responsabilidad recae en quien desarrolla una actividad que pueda estimarse como generadora de riesgos o peligros para la comunidad, en cuanto con la misma se incrementan aquellos a los que normalmente las personas se encuentran expuestas y, por ende, será responsable quien la ejerza, de hecho, o de derecho, o esté bajo su dirección, manejo o control.

d) En este sistema, por lo general, exonera solo el elemento extraño, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero, cuando actúa como causa única y exclusiva o, mejor la causa extraña impide la imputación causal del daño a la conducta del supuesto autor.

e) En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen jurídico aplicable es el consagrado en el artículo 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas jurídicas que existan sobre la actividad concreta.

Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en la estructuración de la responsabilidad por actividad peligrosa y en su exoneración, existen directrices diferenciales concretas, pues, de otra manera, no existiría fundamento plausible para entender por qué de acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración probatoria del juzgador, se tipifica a pesar de un comportamiento diligente ni tampoco porqué subsiste aún en circunstancias de una “culpa” concurrente de la víctima. Ello es así, en tanto, constituye una modalidad específica de responsabilidad cuyos parámetros son singulares y concretos”³

En reciente pronunciamiento, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 7 de marzo de 2019, describió los supuestos de hecho que exige el artículo 2356 del Código Civil para configurar la responsabilidad civil o el rompimiento del nexo causal, en casos de concurrencia de actividades peligrosas, esto dijo:

“Se resalta que en el proceso de responsabilidad extracontractual por daños ocasionados en el ejercicio de actividades peligrosas, la víctima sólo está obligada a probar el daño y la relación de causalidad, mientras que al autor no le basta probar diligencia o cuidado, ni ausencia de culpa -dado que esta se presume-, sino que debe acreditar plenamente la presencia de un elemento extraño como causa exclusiva del daño, esto es, fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la víctima o intervención de un tercero.”⁴

Con fundamento en las citadas jurisprudencias, no queda duda alguna que el régimen que gobierna las actividades peligrosas es el de la responsabilidad objetiva y el criterio de imputación es el riesgo. En concurrencia de actividades peligrosas - se denomina así, porque el demandante y el demandado, al momento del accidente ejercían la actividad de conductores de vehículos automotores - la forma de establecer la responsabilidad no es el análisis culposo de la conducta, sino la incidencia causal de los

³ Corte suprema de Justicia, sala Civil. M.P WILLIAM NAMÉN VARGAS. Del (24) de agosto de dos mil nueve (2009). Referencia: Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01.

⁴ Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Civil. M.P: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE. Numero de providencia: SC665-2019. Radicación n° 05001 31 03 016 2009-00005-01. Fecha y ciudad: Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

comportamientos. Por lo anterior, podemos concluir: 1) el demandante solo debe probar la causa y el daño, para que se declare la responsabilidad del guardián de la actividad peligrosa y 2) para que el demandado se exonere, solo tiene dos alternativas, que son: 2.1) probar la inexistencia del daño o 2.2) alguna causal de ruptura del nexo causal (hecho de la víctima, hecho del tercero, fuerza mayor y caso fortuito), que deben cumplir con el requisito de imprevisibilidad e irresistibilidad.

3.2.1 Daño.

Para que pueda hablarse de daño indemnizable, es necesario que concurren los siguientes requisitos: que el daño sea cierto, personal y directo.

De las pruebas que se anexan con este escrito, se evidencian las lesiones que sufrió la víctima; la historia clínica, dictámenes de medicina legal y las calificaciones de la pérdida de capacidad que se aportarán en el transcurso del proceso lo demostrarán plenamente.

3.2.2) Nexo causal.

En relación con los hechos que participan en la producción de un daño, es importante diferenciar las imputaciones fácticas y jurídicas, entendidas las primeras como las indicaciones históricas referidas a los hechos en los cuales el demandante edifica sus pretensiones; o el simple señalamiento de las causas materiales, en criterio de quien imputa, que guardan inmediatez con el hecho y que, se considera, contribuyeron desde el punto de vista físico a la concreción del daño. En tanto que las segundas imputaciones, las jurídicas, aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones (constitucionales, legales, administrativas, convencionales o contractuales) en las cuales se plasma el derecho de reclamación.

En materia del NEXO CAUSAL, quedara suficientemente probado que el daño es imputable materialmente al conductor del vehículo, por los siguientes hechos: 1) el vehículo tipo Volqueta de placa TVJ855 impactó con la motocicleta por no respetar su carril, por conducir en exceso de velocidad y falta de precaución y 2) si el conductor del vehículo no hubiese realizado la maniobra peligrosa evitando cruzar con exceso de velocidad y acatando las señales reglamentarias de tránsito que les impedía realizar la maniobra de adelantamiento, el accidente no hubiese ocurrido.

Por lo anterior, se puede concluir que era previsible para el conductor del vehículo, que si no respetaba las señales de tránsito respetando su carril podía colisionar con la motocicleta.

También se deben valorar las omisiones a cumplir los deberes jurídicos que le correspondían en dicha actividad, máxime, cuando el agente dañino, ejercía una actividad peligrosa. En el presente caso, el propietario como guardián de la actividad peligrosa y empleador del conductor, no cumplió con los deberes legales de protección a las personas que circulan en la vía pública.

Como lo ha indicado el H. Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades de no haberse omitido por el que ejerce una actividad peligrosa el deber u obligación que le era exigible y previsible se habría interrumpido, con su acción, el proceso causal impidiendo la producción de la lesión.

3.2.3) Culpa.

Me permito citar las normas que incumplió el demandado al momento de ejercer la actividad peligrosa:

ARTÍCULO 109. DE LA OBLIGATORIEDAD. Todos los usuarios de la vía están obligados a obedecer las señales de tránsito de acuerdo con lo previsto en el artículo 5o, de este código.

ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS. Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.

PARÁGRAFO 1o. Los conductores no podrán transitar con vehículo automotor o de tracción animal por la zona de seguridad y protección de la vía férrea.

PARÁGRAFO 2o. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.

ARTÍCULO 61. VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento.

ARTÍCULO 67. UTILIZACIÓN DE SEÑALES. Todo conductor está obligado a utilizar las señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. Sólo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las siguientes señales manuales:

Para cruzar a la izquierda o cambio de carril sacará el brazo izquierdo y lo extenderá horizontalmente.

Para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia arriba.

Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia abajo.

PARÁGRAFO 1o. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal direccional deberá ponerse por lo menos con sesenta (60) metros de antelación al giro, y en zonas urbanas, por lo menos con treinta (30) metros de antelación.

ARTÍCULO 71. INICIO DE MARCHA. Al poner en movimiento un vehículo estacionado se utilizará la señal direccional respectiva, dando prelación a los demás vehículos en marcha y tomando las precauciones para evitar choques con los vehículos que se aproximen.

3.3) Perjuicios reconocidos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre los perjuicios materiales no hay debate doctrinal y jurisprudencial, siempre se ha reconocido el daño emergente y el lucro cesante.

En cuanto al daño inmaterial, ha sido un tema de debate judicial, pero la última construcción jurisprudencial ha querido sistematizar esta clase de perjuicio, indicando lo siguiente:

“De ahí que el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional.

De suerte que es ésta la oportunidad propicia para retomar la línea trazada por la jurisprudencia de la Sala y, especialmente, por las sentencias de 13 de mayo de 2008 (Exp. 1997-09327-01) y de 18 de septiembre de 2009 (Exp. 2005-00406-01), con relación al tema del resarcimiento de las diversas subclases de perjuicios que constituyen el daño a la persona o extrapatrimonial; y, en concreto, respecto de la protección en materia civil de los bienes jurídicos de especial relevancia constitucional.”⁵

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la reciente sentencia SC5686-2018 (OCENSA) de 19 de diciembre de 2018, establece como obligatorio el precedente jurisprudencial para determinar la cuantía del perjuicio moral, esto dijo:

“No obstante, a la anterior doctrina, que aún prohija esta Corporación, debe agregarse el hecho de que a falta de normativa explícita que determine la forma de cuantificar el daño moral, el precedente judicial del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene un cierto carácter vinculante, para cuya separación es menester que el juez ofrezca razones suficientes de su distanciamiento, pues, en los términos establecidos por la Corte Constitucional:

“La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) el principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontando la continuamente con la realidad social que pretende regular” (C-836 de 2001).

En la jurisdicción ordinaria, competencia de lo civil, desde el año 2014 se han proferido una cantidad considerable de sentencias, tanto de la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia como la del Tribunal Superior de Cali, en las cuales se han establecido unos parámetros, para tasar el daño moral:

⁵ Corte suprema de Justicia de Colombia, sala civil. MP ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. Rad: 11001-31-03-003-2003-00660-01

- En el año 2016 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia fijó el daño moral en la siguiente suma:

“En cuanto al monto de dicha reparación, recientemente, la Corte, en Sentencia CSJ SC13925-2016, radicación 2005-00174-01, lo fijó en \$ 60.000.000. Al efecto, expuso: Siguiendo las pautas reseñadas, se tasarán los perjuicios morales sufridos por los demandantes en la suma de \$ 60'000.000 para cada uno de los padres; \$ 60'000.000 para el esposo; y \$ 60'000.000 para cada uno de los hijos.

El anterior monto se estima razonable, puesto que esta Sala, en circunstancias fácticas similares, ha condenado en el pasado al pago de \$ 53.000.000 (SC nov. 17/2011, exp. 1999-533), y \$ 55.000.000 (SC jul. 9/2012, exp. 2002-101-01).”

- En el año 2016 el Tribunal Superior de Cali en sentencia No 013 del 04 de febrero del 2016 con ponencia del Dr. Hernando Rodríguez Mesa, condenó a favor de una víctima con una pérdida de capacidad laboral del 60% por concepto de perjuicio moral la suma de \$68.945.500 y por concepto de vida de relación \$82.734.600.
- En sentencia del 19 de octubre del año 2017 con ponencia del Magistrado: CESAR EVARISTO LEON VERGARA Dentro del radicado No 76001310301020140029301, condeno: El Tribunal Superior de Cali condenas determinándolas así: a los padres \$59'755.077 a Jennifer Divana Beltrán Marroquín, \$59'017.360 a Nolberto Cáceres Flórez y a los hermanos Nidia Pérez Torres y \$29'508.680 a Víctor Alfonso, Ermin Fabián y Mildred Shirley Cáceres Pérez.
- La Corte Suprema de Justicia en un caso del año 2018 de un menor con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% condeno de la siguiente manera: Teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones permanentes e irreparables sufridas por el menor, que ha generado en su núcleo familiar gran dolor, angustia, aflicción, preocupación y desasosiego en grado sumo, se tasarán los perjuicios morales en la suma de sesenta millones de pesos (\$60'000.000) para la víctima directa de este daño; lo mismo la suma de sesenta millones de pesos (\$60'000.000) para cada uno de sus padres; y treinta millones de pesos (\$30'000.000) para cada uno de los abuelos demandantes.
- En Sentencia del 28 de marzo del 2017, acta Numero 028. Magistrado Carlos Alberto Romero Sánchez, siguiendo la lógica de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cali actualizó el monto de perjuicio moral por muerte para el cónyuge y familiares de primer grado en la suma de \$70.000.000 y para los hijos de crianza en la suma de \$30.000.000.
- En sentencia del Tribunal de Cali, dentro del proceso con radiación: 2016-00287-01 aprobado acta Número 50 del 13 de Julio del 2018, revoco sentencia del juzgado 13 civil del circuito y dijo “a título de daño moral le será reconocido a cada uno de los demandantes legitimados en la causa, la suma de \$68.945.400 teniendo en cuenta que los límites máximos de esta indemnización se encuentran en la suma de \$90.000.000”.
- En sentencia de 19 de diciembre de 2018, la sala civil de la Corte actualizó el límite máximo de perjuicio moral en \$72.000.000, esto dijo

En efecto, las circunstancias del inmenso dolor que se refleja en la ferocidad y barbarie de las acciones padecidas por los demandantes daban, con toda seguridad, lugar a que el Tribunal

impusiera una condena acorde con esa realidad, así fuese tomando la suma que como guía por entonces tenía la Corte establecida desde 2012 y que, frente a la indecible atrocidad de los eventos narrados y probados en este proceso ameritan –para este caso particular- una suma mayor a la que entonces tenía dispuesta (\$60,000,000.00) y que hoy reajusta a setenta y dos millones de pesos (\$72,000,000.00) para el daño moral propio sufrido por los demandantes a raíz del fallecimiento de padres, hijos, esposos y compañeros permanentes, la mitad de ese valor para hermanos, abuelos y nietos y la cuarta parte para el resto de parientes

Los casos antes expuestos, son muerte o lesiones, y se ha fijado como valor máximo hasta el día de hoy en la suma de \$90.000.000. No es coherente que el Juez de instancia, condene a favor de una persona que ha perdido la visión de un ojo, que debe caminar con muletas y calificado con una pérdida de capacidad laboral del 43.30%, la suma de \$20.000.000; para cada uno de sus hijos la suma de \$8.000.000; y para su esposa \$ 15.000.000. La sentencia objeto de recurso vulnera el derecho a la igualdad de las víctimas y desconoce el dolor que sufrieron los demandantes, que fue en la máxima expresión.

Con las declaraciones de parte, historia clínica y testimonios controvertidos dentro del proceso, se demuestra el sufrimiento grave de cada uno de los demandantes.

CAPÍTULO 4. FUNDAMENTOS NORMATIVOS.

CONTITUCIONALES: Artículos 1, 2, 6, 217, 318 y 365.

CODIGO CIVIL: Artículos 86, 131, 265, 1613 al 1617, 2341, 2356.

LEY 153 de 1887: Artículos 4, 5 y 8.

CODIGO NACIONAL DE TRÁNSITO: Artículos 55, 60, 61, 66, 67, 71, 109.

CÓDIGO DE COMERCIO: Artículos 1036, 1052, 1072, 1080, inciso 3 Art.1081, 1172, 1131, 1133.

CODIGO GENERAL DEL PROCESO artículo 368 y ss.

CAPÍTULO 5. PRETENSIONES

5. 1). DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Declárese Civil y solidariamente responsable a los demandados Milton Alberto Mosquera Padilla, Nelly Hurtado Viveros y HDI Seguros S.A por los perjuicios inmateriales y materiales ocasionados a Carlos Enrique Gutierrez (Lesionado), Carlos Eduardo Gutiérrez Murillo (Hijo), John Edwin Gutiérrez Murillo (Hijo), Luis Fernando Gutiérrez Murillo (Hijo), María Yolanda Murillo (Cónyuge) con ocasión del accidente de tránsito causado por la imprudencia e impericia del conductor del vehículo de placas IHO35 el 26 de enero de 2023.

5.2). CONDENA DIRECTA A LA ASEGURADORA.

Condenar a la aseguradora HDI S.A., para que concurra al pago de la indemnización de manera directa a los demandantes con sustento en el contrato de seguros.

5.3) CONDENA DE INTERESES MORATORIOS A LA ASEGURADORA.

Con fundamento en el artículo 1080 del Código de Comercio y/o artículo 94 del C.G del P solicito se condene a HDI SEGUROS S.A, para que, a partir del mes siguiente a la fecha de la presentación de la reclamación extrajudicial, la radicación de la demanda o la notificación del auto admisorio, al pago de intereses moratorios igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia financiera o quien haga sus veces, aumentado en la mitad.

5.4) CONDENA DE COSTOS DEL PROCESO:

Con fundamento en el artículo 1128 del Código de Comercio solicito se condene a HDI SEGUROS S.A., (asegurador) a pagar a favor de la demandantes-beneficiarios, las costas procesales a las que sean condenadas la aseguradora y los asegurados, pago de honorarios de dictámenes periciales, pago de honorarios de abogados de las víctimas y cualquier otro costo del proceso

5.5). CONDENAR A PAGAR A TODOS LOS DEMANDADOS LOS SIGUIENTES RUBROS.

Que como consecuencia de los numerales precedentes, se condene a pagar a los demandados Milton Alberto Mosquera Padilla, Nelly Hurtado Viveros y HDI Seguros S.A, por los perjuicios inmateriales y materiales ocasionados a Carlos Enrique Gutiérrez (Lesionado), Carlos Eduardo Gutiérrez Murillo (Hijo), John Edwin Gutiérrez Murillo (Hijo), Luis Fernando Gutiérrez Murillo (Hijo), María Yolanda Murillo (Cónyuge).

5.5.2). DAÑO EMERGENTE: Por concepto de gastos de honorarios cancelados a la Junta Regional de Calificación de invalidez para realizar la calificación de la Pérdida de la capacidad laboral como particular transporte y revisión de accidentes, la suma de un millón de pesos (\$1.000.000).

5.6.1). PERJUICIOS MORALES.

Por concepto de **PERJUICIO MORAL** a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

Para cada una de las siguientes personas: Carlos Enrique Gutiérrez (Lesionado), Carlos Eduardo Gutiérrez Murillo (Hijo), John Edwin Gutiérrez Murillo (Hijo), Luis Fernando Gutiérrez Murillo (Hijo), María Yolanda Murillo (Cónyuge) la suma equivalente de 100 salarios mínimos mensuales que en pesos a la presentación de la demanda son \$ 116.000.000 para cada uno de ellos o el mayor valor que resulte probado.

5.6.2). PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN:

Por concepto de **PERJUICIO A LA VIDA DE RELACION** a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

Para cada una de las siguientes personas: Carlos Enrique Gutierrez (Lesionado), Carlos Eduardo Gutierrez Murillo (Hijo), John Edwin Gutierrez Murillo (Hijo), Luis Fernando Gutierrez Murillo (Hijo), Maria Yolanda Murillo (Cónyuge) la suma equivalente de 100 salarios mínimos mensuales que en pesos a la presentación de la demanda son \$ 116.000.000 para cada uno de ellos o el mayor valor que resulte probado.

5.6.3). DAÑO A BIENES JURÍDICOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (EN EL PRESENTE CASO, DAÑO A LA SALUD).

Por concepto de DAÑO A LA SALUD a favor de la demandante, la siguiente suma de dinero:

Para Carlos Enrique Gutiérrez la suma equivalente de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes que en pesos a la presentación de la demanda son \$58.000.000.

5.6.4). DAÑO A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD.

Por concepto de **PERDIDA DE OPORTUNIDAD** a favor de los demandantes, las siguientes sumas de dinero:

Para cada una de las siguientes personas: Carlos Enrique Gutierrez (Lesionado), Carlos Eduardo Gutierrez Murillo (Hijo), John Edwin Gutierrez Murillo (Hijo), Luis Fernando Gutierrez Murillo (Hijo), Maria Yolanda Murillo (Cónyuge), la suma equivalente de 100 salarios mínimos mensuales que en pesos a la presentación de la demanda son \$ 116.000.000 para cada uno de ellos o el mayor valor que resulte probado.

5.6.5). INTERESES.

Se debe a cada uno de los demandantes o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, los que se generen a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia o desde la prueba de la cuantía y el siniestro.

5.6.6). Condenar en costas y en agencias en derecho a los demandados.

5.6.7). INDEXACIÓN.

Actualizar las sumas pretendidas al momento de liquidar la sentencia y las coberturas de todas las pólizas y amparos.

**CAPÍTULO 6.
JURAMENTO ESTIMATORIO**

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 206 del Código General del Proceso, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la suma de \$1.879.679.980 solicitados en las pretensiones, están estimadas razonadamente de acuerdo con las últimas pautas jurisprudenciales y según las pruebas que allegarán al proceso. Para tales efectos me permito justificar las pretensiones objeto de juramento: que en la presente demanda es el lucro cesante:

6.1). LUCRO CESANTE

La pretensión de lucro cesante se cuantificó teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Carlos Enrique Gutiérrez (lesionado), para el momento del accidente se desempeñaba como fotógrafo Obteniendo un ingreso mensual de 1.160.000 por concepto de salario.

Pérdida de capacidad laboral y edad al momento del accidente:

La víctima fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, en un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 18.60%.

Vida laboral por liquidar:

Teniendo en cuenta que para la fecha de su lesión tenía 70 años, su vida probable, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1555 de 2010 emitida por la Superintendencia financiera era de 183,6 meses.

Aumento del 25% por el factor prestacional:

El valor del ingreso mensual percibido por el lesionado al tiempo del accidente el siguiente: \$1.160.000 más 25% de factor prestacional, igual a \$1.450.000

PARAMETROS:

FECHA DEL ACCIDENTE: 26 de enero de 2022.

Ingreso al momento del accidente = \$1.160.000

Ingreso + el 25% del factor prestacional: \$1.450.000

Renta x el porcentaje de pérdida de capacidad laboral= \$ 1.160.000 * 18,60% = \$215.760

VIDA PROBABLE = 183,6 meses con base en la resolución 1555 DE 2010 y teniendo presente que a la fecha del accidente tenía 70 años.

IPP (incapacidad total Permanente) LUCRO CESANTE CONSOLIDADO DESDE EL 26/01/2022 hasta el 26/01/2025 (fecha de probable liquidación de sentencia) para un total de 36 meses.

$$S = \frac{Ra (1 + i)^36 - 1}{i}$$

$$LCC = \frac{\$215.760 * 1.004867^{36} - 1}{0.004867}$$

LCC= \$8.466.929

6.4). LUCRO CESANTE FUTURO.

LUCRO CESANTE FUTURO: A los 183,6 meses de promedio de vida, se debe restar los meses de lucro cesante consolidado de 36 meses, para quedar un total de lucro cesante futuro por liquidar de 147,6 meses.

$$S = \frac{Ra (1 + i)^n - 1}{i(1 + i)^n}$$

$$LCF = \frac{\$215.760 * 1.004867^{147,6} - 1}{0.004867 * (1, 004867^{147,6})}$$

LCF= \$31.998.072.

TOTAL LUCRO CESANTE: \$22.679.980

+

DAÑO EMERGENTE: \$1.000.000

TOTAL PERJUICIO MATERIAL: \$23.679.980

CAPÍTULO 7. PRUEBAS.

7.1). PRUEBAS DOCUMENTALES:

Que acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente; el contrato de seguros; las causas de los perjuicios y la guarda del propietario.

1. Copia del documento de identidad de los demandantes.
2. Registro civil de nacimiento de Carlos Eduardo Gutiérrez, John Edwin Gutiérrez y Luis Fernando Gutiérrez Murillo.
3. Acta de matrimonio
4. Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de HDI seguros S.A.
5. Informe de tránsito A001399081 elaborado el 26-01-2022 por el agente de tránsito Johnny Ledesma Chavarro adscrito a la Secretaría de Tránsito de Cali.
6. Copia de la historia clínica completa generada hasta la fecha.
7. Informe pericial de clínica forense
8. Dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral
9. Recibo de consignación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle.
10. Solicitud de copias a la fiscalía 60 Local de Cali.

7.2) DECLARACION DE TESTIGOS: Solicito citar a las siguientes personas, todas mayores de edad, quienes declararán sobre los hechos de esta demanda, los perjuicios ocasionados a mis poderdantes y en forma general sobre todo lo que conozcan e importe al proceso:

JOHN FREDDY CASTRO GÓNZALEZ: Identificado con cédula de ciudadanía No. 17.383.903 dirección de correo electrónico jhonfreddycastrogonzalez61@gmail.com. Objeto de la prueba: Va declarar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito y en forma general todo aquello que resulte relevante para probar los hechos de la demanda

LUIS EDUARDO GIRALDO Identificado con cédula de ciudadanía No. 70383722. Correo dianaylucho97@gmail.com. Objeto de la prueba: Va declarar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito y en forma general todo aquello que resulte relevante para probar los hechos de la demanda.

- Solicito al señor juez permitirme interrogar a los demandantes, a efecto de que respondan las preguntas que le formularé para que aclaren, precisen o informen sobre los hechos y en general sobre todo lo que sea relevante para el proceso. Las identificaciones y las direcciones de notificaciones se indicaron en el acápite de partes.

7.6). Dictamen de reconstrucción de accidente de tránsito: De conformidad con el artículo 227 del Código General del Proceso, anuncio al señor Juez, que voy a aportar dictamen de reconstrucción de accidente de tránsito, para que el perito identifique sentidos viales, puntos de impacto, velocidades, prelación vial, características de la vía, estado del tiempo y causas del accidente. La víctima no ha podido realizar el dictamen porque no tiene los recursos suficientes para pagar a un perito físico.

7.7) Oficiar a la fiscalía general de la Nación quien se la investigación penal para que allegue copia completa de todo el expediente penal del proceso con radicado No 760016099165202284224, incluyendo videos y entrevistas. (Anexo petición de los documentos).

CAPÍTULO 8.

CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA.

Solicito en el presente proceso se invierta la carga de la prueba de la culpa y el nexo causal al demandado. Lo anterior, lo sustento en el artículo 167 del Código General del Proceso que dice:

“exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.”

Se debe tener presente, que al momento del accidente los demandantes se encontraban en un estado de incapacidad para recolectar medios probatorios, porque la víctima, se encontraba gravemente lesionada y sus Familiares se encontraban en un estado de incapacidad mental por la noticia del accidente y lejos del sitio de ocurrencia del accidente de tránsito.

CAPÍTULO 9.

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

Esta solicitud debe analizarse bajo la óptica del Nuevo Código General del Proceso, que en su articulado sobre medidas cautelares en procesos declarativos entro a regir a partir del 1 de octubre del 2012.

El nuevo proceso concebido por el legislador va en busca de satisfacer la necesidad de proteger el derecho a la tutela judicial efectiva, institución que se ve vulnerada si no existen medios coercitivos para hacer cumplir las providencias judiciales.

Así, pues, la función de las providencias cautelares nace de la relación que se establece entre dos termino: la necesidad de que la providencia, prácticamente eficaz, se dicte sin retardo, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo una providencia definitiva, es este uno de aquellos casos (la disciplina de los cuales constituye quizá el más antiguo y el mas difícil problema practico de toda legislación procesal) en que la necesidad de hacer las cosas pronto choca con la necesidad de

hacerlas bien”: a fin de que la providencia definitiva nazca con los mayores garantía de justicia, debe estar precedida del regular y mediato desarrollo de toda una serie de actividades, para el cumplimiento de las cuales es necesario un periodo, frecuentemente no breve, de espera; pero esta mora indispensable para el cumplimiento del iter procesal, ofrece el riesgo de convertir en prácticamente ineficaz la providencia definitiva, que parece destinada, por deseo de perfeccion, a llegar demasiado tarde, como la medicina largamente elaborado para un enfermo ya muerto.”⁶

El artículo 590 del CGP vigente, estableció medidas cautelares taxativas e innominadas para todos los procesos declarativos, expresamente señalo en el literal b “la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual” y en el literal C “Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”.

En estos dos literales desarrollo la medida cautelar Taxativa denominada inscripción de la demanda y la medida cautelar innominada “que es la reforma más importante en materia de medidas cautelares, por cuanto el nuevo estatuto procesal, que en esta materia sigue la doctrina alemana, le atribuye al juez una posición más activista, a fin de decretar como medida cautelar la que resulte más ajustada y razonable respecto al derecho que reclama, para que este no resulte ilusorio, constituyéndose en una cautela innominada o atípica”⁷.

En el presente caso los presupuestos formales para decretar la medida cautelar están configurados:

Fumus boni iuris: En el informe de tránsito se establece la causa del accidente y existen una PRESUCION DE CULPA en contra del conductor del vehículo de placas TVJ855.

Periculum in mora: Por la mora judicial y por el quantum de la demanda.

Por los anteriores presupuestos, solicito se sirva decretar las siguientes medidas cautelares:

Taxativa:

- Conforme al Literal B Numeral 1 del artículo 590 del C.G. del P: Inscripción de la demanda en el establecimiento de comercio denominado “HDI SEGUROS S.A”, identificado con matrícula mercantil 00583138 de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bien de propiedad de la demandada HDI Seguros S.A.
- En consecuencia, solicito oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali para que se realice el registro.

CAPÍTULO 10. ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA.

⁶ Calamandrei, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, ed. ARA EDITORES EIRL, pág. 43.

⁷ Forero Silva, Jorge. Medidas Cautelares en el código general del proceso, 1 ed., pontificia universidad javeriana y Temis. Pág. 25.

1. Lucro Cesante: 20,4 SMLMV= \$23.679.980
2. Daño emergente: \$1.000.000
3. Perjuicios Morales: 500 SMLMV= (\$580.000.00)
4. Perjuicio a la Vida de Relación: 500 SMLMV= (\$580.000.00)
5. Daño a la salud: 100 SMLMV= (\$116.000.000)
6. Perjuicio a la Pérdida de Oportunidad: 500 SMLMV= (\$580.000.00)

La pretensión y la cuantía las estimo razonadamente en una suma igual a mil ochocientos setenta y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta pesos. **(\$1.879.679.980) M/C.T.E.** En todo el caso mayor a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por la cuantía, la naturaleza de la acción y el lugar donde ocurrieron los hechos, es usted, señor juez competente para conocer de esta demanda.

CAPÍTULO 11. FACTORES DE COMPETENCIA.

Por la cuantía, el lugar donde SUCEDIÓ EL HECHO DAÑINO, es usted, señor (a) Juez, competente para conocer de esta demanda.

CAPÍTULO 12. PROCEDIMIENTO APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

El procedimiento a seguir es el PROCESO VERBAL de primera instancia establecido en los artículos 368 del CGP.

CAPÍTULO 13. ANEXOS.

- Lo mencionado en el acápite de pruebas.
- El poder a mi conferido por los señores demandantes.

CAPÍTULO 14. NOTIFICACIONES.

ABOGADO:

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO, Bajo la gravedad de juramento informo que los demandantes y su representante judicial recibirán notificaciones en la carrera 4 No 11-45 de Cali, Ed Banco de Bogotá oficina 324. Teléfono 8828306-3175586909-3007060472. Correo electrónico: beimar.repare@gmail.com - repate.felipe@gmail.com – dependencia.repare@gmail.com.

Las personas demandadas a los lugares señalados en el acápite de identificación de las partes.

Atentamente,



LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO.
C.C: No. 1.143.836.087 de Cali (Valle).
T.P: No. 237908 del C.S. de la J.



REPARE SAS <repare.felipe@gmail.com>

Poder Civil

jhon edwin gutierrez murillo <gjhonedwin@gmail.com>

2 de marzo de 2023, 19:02

Para: "repare.felipe@gmail.com" <repare.felipe@gmail.com>, "beimar.repare@gmail.com" <beimar.repare@gmail.com>

Señor (a),
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

REFERENCIA: Otorgamiento de poder especial.

JOHN EDWIN GUTIERREZ MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16933118 actuando en nombre propio me dirijo a usted con el fin de manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente a los siguientes abogados: (1) En calidad de apoderado principal al abogado LUIS FELIPE HURTADO CATANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.836.087 expedida en Cali (Valle), abogado en ejercicio, portador de la T.P. 237.908 expedida por el C.S.J. (2) En calidad de apoderados sustitutos, a los abogados BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.043.463 expedida en López (Cauca) abogado en ejercicio, portador de la T.P. 229.736 expedida por el C.S.J.

La facultad principal que les otorgó a los abogados antes señalados es para que inicien, tramiten y lleven hasta su culminación, un proceso Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual de mayor cuantía, en contra de las siguientes personas, que tendrán la calidad de demandados (1). MILTON ALBERTO MOSQUERA PADILLA identificado con cédula No 1.130.592.278 (2) HDI SEGUROS S.A. identificada con Nit Número 860004875-6 representada legalmente por Juan Rodrigo Ospina Londoño por quien haga sus veces (3) Nelly Hurtado Viveros identificada con cédula de ciudadanía 25435680.

La demanda que van a presentar los apoderados es con el objetivo de que, a los demandados, identificados en el párrafo anterior, se les declare civil y solidariamente responsables y se les condene al pago de los perjuicios materiales, inmateriales, morales, a la vida de relación, alteraciones a las condiciones de existencia, a la salud, proyecto de vida y cualquier otra pretensión solicitada en la demanda. Las causas por las que se van a demandar, tienen fundamento en el daño que sufrió mi padre CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ identificada con cédula No 14.999.965, a causa del accidente de tránsito ocurrido el 26 de enero de 2022, como consecuencia de la imprudencia e impericia del conductor del vehículo de placas IHO345, señor MILTON ALBERTO MOSQUERA.

Mis apoderados quedan facultados para que afirmen bajo la gravedad del juramento, que no poseo los recursos necesarios para sufragar los gastos del proceso, y solicitan el amparo de pobreza. También, quedan investidos de todas las facultades requeridas para lograr el fin perseguido con el presente poder, en especial para: transigir, sustituir, reasumir, desistir, conciliar judicial o extrajudicial, tachar falsedad, tachar de sospechoso, interponer toda clase de recursos, solicitar medidas cautelares, integrar litisconsorcios, tramitar incidentes, liquidar costas, y todas las facultades inherentes al cumplimiento del presente mandato conforme al artículo 77 del Código General del Proceso y normas concordantes.

Atentamente:

JHON EDWIN GUTIERREZ MURILLO
Cédula de ciudadanía No. 16933118

Acepto el poder:

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO.

C.C. No. 1 143.836.087 de Cali (Valle). T.P. No. 237908 del C.S.J.

Correo electrónico: repare.felipe@gmail.com

BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA.

C.C. No. 1.059.043.463 de López (Cauca). T.P. No. 229736 del C.S.J.

Correo electrónico: beimar.repare@gmail.com



REPARE SAS <repare.felipe@gmail.com>

Poder Civil

1 mensaje

luis fernando gutierrez <lfgutierrez0825_@hotmail.com>

7 de marzo de 2023, 14:30

Para: "repare.felipe@gmail.com" <repare.felipe@gmail.com>, "beimar.repare@gmail.com" <beimar.repare@gmail.com>

Señor (a),

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

REFERENCIA: Otorgamiento de poder especial.

LUIS FERNANDO GUTIERREZ MURILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.532.304 actuando en nombre propio me dirijo a usted con el fin de manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente a los siguientes abogados: (1) En calidad de apoderado principal al abogado LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.836.087 expedida en Cali (Valle), abogado en ejercicio, portador de la T.P. 237.908 expedida por el C.S.J. (2) En calidad de apoderados sustitutos, a los abogados BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.043.463 expedida en López (Cauca) abogado en ejercicio, portador de la T.P. 229.736 expedida por el C.S.J.

La facultad principal que les otorgo a los abogados antes señalados es para que inicien, tramiten y lleven hasta su culminación, un proceso Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual de mayor cuantía, en contra de las siguientes personas, que tendrán la calidad de demandados (1). MILTON ALBERTO MOSQUERA PADILLA identificado con cédula No 1.130.592.278 (2) HDI SEGUROS S.A. identificada con Nit Número 860004875-6 representada legalmente por Juan Rodrigo Ospina Londoño por quien haga sus veces (3) Nelly Hurtado Viveros identificada con cedula de ciudadanía 25435680.

La demanda que van a presentar los apoderados es con el objetivo de que, a los demandados, identificados en el párrafo anterior, se les declare civil y solidariamente responsables y se les condene al pago de los perjuicios materiales, inmateriales, morales, a la vida de relación, alteraciones a las condiciones de existencia, a la salud, proyecto de vida y cualquier otra pretensión solicitada en la demanda. Las causas por las que se van a demandar, tienen fundamento en el daño que sufrió mi padre CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ identificada con cédula No 14.999.965, a causa del accidente de tránsito ocurrido el 26 de enero de 2022, como consecuencia de la imprudencia e impericia del conductor del vehículo de placas IHO345, señor MILTON ALBERTO MOSQUERA.

Mis apoderados quedan facultados para que afirmen bajo la gravedad del juramento, que no poseo los recursos necesarios para sufragar los gastos del proceso, y soliciten el amparo de pobreza. También, quedan investidos de todas las facultades requeridas para lograr el fin perseguido con el presente poder, en especial para: transigir, sustituir, reasumir, desistir, conciliar judicial o extrajudicial, tachar falsedad, tachar de sospechoso, interponer toda clase de recursos, solicitar medidas cautelares, integrar litisconsorcios, tramitar incidentes, liquidar costas, y todas las facultades inherentes al cumplimiento del presente mandato conforme al artículo 77 del Código General del Proceso y normas concordantes.

Atentamente:

LUIS FERNANDO GUTIERREZ MURILLO
Cedula de ciudadanía No. 94.532.304

Acepto el poder:

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO.

C.C. No. 1 143.836.087 de Cali (Valle). T.P. No. 237908 del C.S.J.

Correo electrónico: repare.felipe@gmail.com

BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA.

C.C. No. 1.059.043.463 de López (Cauca). T.P. No. 229736 del C.S.J.

Correo electrónico: beimar.repare@gmail.com



beimar angulo <beimar.repare@gmail.com>

Poder Civil

1 mensaje

Yolanda Murillo <yam8555@gmail.com>

21 de marzo de 2023, 18:06

Para: repare.felipe@gmail.com, beimar.repare@gmail.com

Señor (a),
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

REFERENCIA: Otorgamiento de poder especial.

MARIA YOLANDA MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 31296679 actuando en nombre propio me dirijo a usted con el fin de manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente a los siguientes abogados: (1) En calidad de apoderado principal al abogado LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.836.087 expedida en Cali (Valle), abogado en ejercicio, portador de la T.P. 237.908 expedida por el C.S.J. (2) En calidad de apoderados sustitutos, a los abogados BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.043.463 expedida en López (Cauca) abogado en ejercicio, portador de la T.P. 229.736 expedida por el C.S.J.

La facultad principal que les otorgó a los abogados antes señalados es para que inicien, tramiten y lleven hasta su culminación, un proceso Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual de mayor cuantía, en contra de las siguientes personas, que tendrán la calidad de demandados (1). MILTON ALBERTO MOSQUERA PADILLA identificado con cédula No 1.130.592.278 (2) HDI SEGUROS S.A. identificada con Nit Número 860004875-6 representada legalmente por Juan Rodrigo Ospina Londoño por quien haga sus veces (3) Nelly Hurtado Viveros identificada con cédula de ciudadanía 25435680.

La demanda que van a presentar los apoderados es con el objetivo de que, a los demandados, identificados en el párrafo anterior, se les declare civil y solidariamente responsables y se les condene al pago de los perjuicios materiales, inmateriales, morales, a la vida de relación, alteraciones a las condiciones de existencia, a la salud, proyecto de vida y cualquier otra pretensión solicitada en la demanda. Las causas por las que se van a demandar, tienen fundamento en el daño que sufrió mi padre CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ identificada con cédula No 14.999.965, a causa del accidente de tránsito ocurrido el 26 de enero de 2022, como consecuencia de la imprudencia e impericia del conductor del vehículo de placas IHO345, señor MILTON ALBERTO MOSQUERA.

Mis apoderados quedan facultados para que afirmen bajo la gravedad del juramento, que no poseo los recursos necesarios para sufragar los gastos del proceso, y soliciten el amparo de pobreza. También, quedan investidos de todas las facultades requeridas para lograr el fin perseguido con el presente poder, en especial para: transigir, sustituir, reasumir, desistir, conciliar judicial o extrajudicial, tachar falsedad, tachar de sospechoso, interponer toda clase de recursos, solicitar medidas cautelares, integrar litisconsorcios, tramitar incidentes, liquidar costas, y todas las facultades inherentes al cumplimiento del presente mandato conforme al artículo 77 del Código General del Proceso y normas concordantes.

Atentamente:

MARIA YOLANDA MURILLO
Cédula de ciudadanía No. 31296679

Acepto el poder:

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO.
C.C. No. 1 143.836.087 de Cali (Valle). T.P. No. 237908 del C.S.J.
Correo electrónico: repare.felipe@gmail.com

BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA.
C.C. No. 1.059.043.463 de López (Cauca). T.P. No. 229736 del C.S.J.
Correo electrónico: beimar.repare@gmail.com



REPARE SAS <repare.felipe@gmail.com>

Poder civil

CARLOS GUTIERREZ <fotoscaliche@gmail.com>

26 de enero de 2023, 10:05

Para: "repare.felipe@gmail.com" <repare.felipe@gmail.com>, repare.beimar@gmail.com

Señor (a),
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
E.S.D.

OTORGAMIENTO DE PODER.

CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ identificado con C.C No.14.999.965, obrando en nombre propio, me dirijo ante usted con el fin de manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente a los siguientes abogados: 1) en calidad de apoderado principal, al señor LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.836.087 y portador de la T.P. 237.908 expedida por el C.S. de la J. y 2) en calidad de apoderados sustitutos, al señor BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.043.463 y portador de la T.P. 229.736 expedida por el C.S. de la J.

La facultad principal que les otorgo a los abogados antes señalados es para que inicien, tramiten y lleven hasta su culminación, un proceso Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual de mayor cuantía, en contra de las siguientes personas, que tendrán la calidad de demandados MILTON ALBERTO MOSQUERA PADILLA identificado con cédula de ciudadanía 1130592278 que conducía el vehículo de placa IHO345 Y Seguros Del Estado S A NIT 860.009.578-6. representada legalmente por Eduardo Arce Caicedo o por quien haga sus veces.

La demanda que van a presentar los apoderados es con el objetivo de que, a los demandados, identificados en el párrafo anterior, se les declare civil y solidariamente responsables y se les condene al pago de los perjuicios materiales, inmateriales, morales, a la vida de relación, alteraciones a las condiciones de existencia, a la salud, proyecto de vida y cualquier otra pretensión solicitada en la demanda. Las causas por las que se van a demandar, tienen fundamento en las lesiones personales que sufrí a causa del accidente de tránsito ocurrido el 26 de enero de 2022.

Mis apoderados quedan facultados para que afirmen bajo la gravedad del juramento, que no poseo los recursos necesarios para sufragar los gastos del proceso y soliciten el amparo de pobreza. También, quedan investidos de todas las facultades requeridas para lograr el fin perseguido con el presente poder, en especial para: recibir títulos, transigir, sustituir, reasumir, desistir, conciliar judicial o extrajudicial, tachar falsedad, tachar de sospechoso, interponer toda clase de recursos, solicitar medidas cautelares, integrar litisconsorcios, tramitar incidentes, liquidar costas, y todas las facultades inherentes al cumplimiento del presente mandato conforme al artículo 77 del Código General del Proceso y normas concordantes.

Atentamente:

CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ
C.C. 14.999.965 (Valle),

Acepto el poder:

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO.
C.C. No. 1 143.836.087 de Cali (Valle).
T.P. No. 237908 del C.S.J.
Correo electrónico: repare.felipe@gmail.com

BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA.
C.C. No. 1.059.043.463 de López (Cauca).

T.P No. 229736 del C.S.J.

Correo electrónico: beimar.repare@gmail.com



96b92f0e-ef50-403a-b887-4b1e45e80a8c.PDF
315K



REPARE SAS <repare.felipe@gmail.com>

Poder Civil.

1 mensaje

Carlos Eduardo Gutierrez Murillo <krlhos-11@hotmail.com>

7 de marzo de 2023, 19:14

Para: "repare.felipe@gmail.com" <repare.felipe@gmail.com>, "beimar.repare@gmail.com" <beimar.repare@gmail.com>

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

REFERENCIA: Otorgamiento de poder especial.

CARLOS EDUARDO GUTIERREZ MURILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1144127316 actuando en nombre propio me dirijo a usted con el fin de manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente a los siguientes abogados: (1) En calidad de apoderado principal al abogado LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.836.087 expedida en Cali (Valle), abogado en ejercicio, portador de la T.P. 237.908 expedida por el C.S.J. (2) En calidad de apoderados sustitutos, a los abogados BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.043.463 expedida en López (Cauca) abogado en ejercicio, portador de la T.P. 229.736 expedida por el C.S.J.

La facultad principal que les otorgo a los abogados antes señalados es para que inicien, tramiten y lleven hasta su culminación, un proceso Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual de mayor cuantía, en contra de las siguientes personas, que tendrán la calidad de demandados (1).

MILTON ALBERTO MOSQUERA PADILLA identificado con cédula No 1.130.592.278 (2) HDI SEGUROS S.A. identificada con Nit Número 860004875-6 representada legalmente por Juan Rodrigo Ospina Londoño por quien haga sus veces (3) Nelly Hurtado Viveros identificada con cedula de ciudadanía 25435680.

La demanda que van a presentar los apoderados es con el objetivo de que, a los demandados, identificados en el párrafo anterior, se les declare civil y solidariamente responsables y se les condene al pago de los perjuicios materiales, inmateriales, morales, a la vida de relación, alteraciones a las condiciones de existencia, a la salud, proyecto de vida y cualquier otra pretensión solicitada en la demanda. Las causas por las que se van a demandar, tienen fundamento en el daño que sufrió mi cónyuge CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ identificada con cédula No 14.999.965, a causa del accidente de tránsito ocurrido el 26 de enero de 2022, como consecuencia de la imprudencia e impericia del conductor del vehículo de placas IHO345, señor MILTON ALBERTO MOSQUERA.

Mis apoderados quedan facultados para que afirmen bajo la gravedad del juramento, que no poseo los recursos necesarios para sufragar los gastos del proceso, y soliciten el amparo de pobreza. También, quedan investidos de todas las facultades requeridas para lograr el fin perseguido con el presente poder, en especial para: transigir, sustituir, reasumir, desistir, conciliar judicial o extrajudicial, tachar falsedad, tachar de sospechoso, interponer toda clase de recursos, solicitar medidas cautelares, integrar litisconsorcios, tramitar incidentes, liquidar costas, y todas las facultades inherentes al cumplimiento del presente mandato conforme al artículo 77 del Código General del Proceso y normas concordantes.

Atentamente:

CARLOS EDUARDO GUTIERREZ MURILLO
Cedula de ciudadanía No. 1144127316

Acepto el poder:

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO.

C.C. No. 1 143.836.087 de Cali (Valle). T.P. No. 237908 del C.S.J.

Correo electrónico: repare.felipe@gmail.com

BEIMAR ANDRES ANGULO SARRIA.

C.C. No. 1.059.043.463 de López (Cauca). T.P. No. 229736 del C.S.J.

Correo electrónico: beimar.repare@gmail.com